

**ARGENTINA Y LA PESADA CARGA DE LA DEUDA EXTERNA**

Isaac Yuyo Rudnik  
Movimiento Barrios de Pie

***Algunos datos históricos***

Para abordar el análisis de las actuales negociaciones que afronta el estado argentino con los organismos multilaterales de crédito por la deuda externa, quizás convenga recordar ciertos elementos históricos, que aunque son muy conocidos en general, es bueno tenerlos presente en cifras concretas. Para lo cual vamos a recurrir a algunos cuadros tomados de diversas publicaciones.

**Cuadro1 Deuda Externa Argentina y pagos realizados 1975-1983**  
(En miles de millones de dólares)

<b>AÑO</b>	<b>DEUDA</b>	<b>SERVICIO PAGADO</b>
<b>1975</b>	<b>7875</b>	
<b>1976</b>	<b>8280</b>	<b>1616</b>
<b>1977</b>	<b>9679</b>	<b>1849</b>
<b>1978</b>	<b>12496</b>	<b>3310</b>
<b>1979</b>	<b>19034</b>	<b>2255</b>
<b>1980</b>	<b>27072</b>	<b>4182</b>
<b>1981</b>	<b>35671</b>	<b>5390</b>
<b>1982</b>	<b>43634</b>	<b>4875</b>
<b>1983</b>	<b>45087</b>	<b>6804</b>

Este primer cuadro abarca los años de la dictadura, durante el cual la deuda se multiplica por seis, mientras que se realizan **pagos por 31.336 millones de dólares**. Este período fue minuciosamente investigado en sede judicial, a raíz de la denuncia realizada por Alejandro Olmos, quedando demostrados los ilícitos cometidos tanto por los personeros de la dictadura, como por los organismos multilaterales de crédito. En el caso de los primeros, pues “*se constató el comportamiento igualmente arbitrario de directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados, quiénes violaron abiertamente la Carta Orgánica del BCRA. Asimismo, se verificó fehacientemente la inexistencia de los registros contables de la deuda externa argentina lo mismo que la obligación impuesta por las autoridades de la dictadura a empresas públicas de endeudarse con el objeto de sostener una política económica, obteniendo así divisas que luego fueron volcadas al mercado de cambios*”<sup>1</sup>. En cuanto a los segundos, porque fueron partícipes en estos delitos, pues compartieron situaciones que no podían desconocer, y porque fueron cómplices de una dictadura que cometió delitos de lesa humanidad. Es de destacar que las refinanciaciones posteriores se hicieron entonces sobre una deuda contraída de manera ilegal. También es importante recordar que es en este período que Domingo Cavallo, como presidente del Banco Central,

<sup>1</sup> Eric Toussaint-Hugo Ruiz Díaz. *Deuda Externa y Auditoría*.

estatiza la deuda privada contraída por los grandes grupos económicos que apoyaron la dictadura.

Cuadro 2 *Deuda Externa y pagos realizados 1984-1990*

AÑO	DEUDA	SERVICIO PAGADO
1984	46903	6281
1985	48302	6208
1986	52449	7323
1987	58458	6244
1988	58834	5023
1989	65256	4357
1990	62730	6158

Este período abarca el gobierno radical de Raúl Alfonsín, que tuvo varios “méritos” importantes respecto a la deuda externa. En primer lugar legitimó la deuda fraudulenta e ilegal de la dictadura, la multiplicó en un 50%, e hizo **pagos por 35.313 millones de dólares**. Al final de su mandato se produce una crisis, con cesación de pagos incluida, que da lugar al inicio de una renegociación que culminará en 1993.

Cuadro 3 *Deuda Externa y pagos realizados por la Argentina 1991-2000*

AÑO	DEUDA	SERVICIO PAGADO
1991	65405	5419
1992	68937	4882
1993	65325	5860
1994	75760	5771
1995	99364	8889
1996	111934	13054
1997	130828	18308
1998	144050	21573
1999	147881	25723
2000	145277	

**TOTAL SERVICIO PAGADO 1976-2000: 212. 280 MILLONES DE DÓLARES<sup>2</sup>**

En el período menemista que abarca la década del '90, se reestructuró la deuda, firmándose un acuerdo en 1993 mediante el cual los compromisos con los bancos se canjearon por bonos que después podían ser comercializados en el mercado secundario. De esta manera los monopolios financieros trasladan el riesgo de futuros e inevitables *defaults* a tenedores individuales de bonos. Este canje, junto al proceso de privatizaciones, supuestamente tenían como objetivo reducir la deuda externa, pues por un lado el canje se realizaba sobre la base de una quita de capital, y por otro las

<sup>2</sup> Datos del Banco Mundial, y del BCRA, tomados del libro *La deuda o la Vida* de Eric Toussaint

privatizaciones le sacaban al estado la carga de empresas “endeudadas e ineficientes”. Sin embargo la deuda se elevó en un 120%, mientras **se realizaron pagos por 103.708 millones de dólares**; por otro lado se desmanteló el estado nacional, entregando los servicios públicos a empresas transnacionales que embolsaron enormes ganancias, giradas casi en su totalidad al exterior.

### *Los organismos multilaterales de crédito y las transnacionales*

Respecto a esto último es interesante hacer un seguimiento de la evolución de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en la primera parte de los '90, cuando se produjeron las privatizaciones, y se inició el traspaso a manos de las transnacionales de grandes grupos de capital nativo. Entre los años 1984-89, desembarcaron en la Argentina 650 millones de dólares en concepto de IED, mientras que entre 1990-93, privatizaciones mediante, el monto alcanza los 10.800, y sólo entre 1994-96, se incrementa a 11.300, llegando a completar al final de la década una suma cercana a los 40.000 mil millones de la misma moneda. Este proceso tiene íntima relación con las sucesivas negociaciones con el FMI y el Banco Mundial, pues cada “carta de intención” enviada, cada acuerdo firmado, contiene condiciones que obligaron a abrir el proceso de privatizaciones, el libre flujo de capitales, a facilitar el reenvío de ganancias de las transnacionales prohibiendo cualquier condición de reinversión en el país, la apertura indiscriminada de la economía, etc. Esto posibilitó que empresas como REPSOL, Telefónica, o Gas Natural (por mencionar sólo algunas de las que hoy están reclamando rabiosamente aumento de tarifas), tuvieron en los '90 rentabilidades que oscilaron entre el 10 y el 17%, mientras que en el resto del mundo las mismas empresas no obtenían nunca una rentabilidad superior al 8%. También es conveniente tener presente que en este período de oro de las inversiones extranjeras directas, de superganancias de las transnacionales, de pagos siderales en concepto de deuda externa, y de desmantelamiento del estado nacional, se instaló la desocupación para millones de argentinos que la siguen padeciendo, tanto ellos como ahora sus hijos.

### *Las negociaciones durante el Gobierno de Kirchner*

Néstor Kirchner llega al gobierno en 2003 para hacerse cargo de un estado desmantelado, una economía tomada por un grupo de monopolios extranjeros que controlan sus principales resortes y a través de ellos al propio estado, cuya estructura en realidad está conformada para defender los intereses de esas minorías y no los de la nación. Desde allí se compromete ante el pueblo argentino a iniciar un camino de cambio, y como hemos venido diciendo desde Patria Libre, va dando pasos en esa dirección. Obviamente uno de los frentes de batalla, de cuyo resultado depende en gran medida la marcha del conjunto del proyecto de **Refundación de la Patria**, que el presidente fue bosquejando en diversas intervenciones, es el de la negociación con los organismos multilaterales de crédito. Del breve recuento histórico anterior, se desprende que los resultados de las negociaciones en las últimas tres décadas –que siempre fueron presentados como exitosos- trajeron nefastas consecuencias para el país.

Alfredo Calcagno en una nota publicada por Le Monde Diplomatique de mayo afirma que “*ante las presiones del FMI la Argentina tiene varias posibilidades: la primera, de conciliación y obediencia, es la que el país sigue desde hace más de cuarto de siglo con los resultados conocidos... La segunda es la de hacerse fuerte dentro de las mismas reglas de juego. Significa mantenerse en la negociación, pero no aceptar las exigencias*

*del FMI en materia de política económica interna, o cláusulas que afecten la soberanía nacional...Grosso modo, es el tipo de negociación que lleva adelante el actual gobierno".* Este ha descartado, por lo menos por ahora, una tercera posibilidad, que podría pasar por una nueva declaración de cesación de pagos, **iniciando una auditoría**, o simplemente manifestando la imposibilidad transitoria de hacer frente a los pagos, **por causas de "fuerza mayor"**(en este caso pagar a los acreedores significa la muerte de miles de personas por hambre, etc.), ya que son argumentos jurídicos que reconocen suficientes antecedentes internacionales como para darles fuerza legal a cualquier presentación ante tribunales de aquí o de otras partes del mundo. También es cuestionable, y existe jurisprudencia en contrario, el falaz argumento de la continuidad de la responsabilidad del estado, independientemente de la ilegitimidad o ilegalidad de los actos de los gobiernos que contrajeron los compromisos.

En la negociación global con el FMI el gobierno le ha dado el carácter de acreedor privilegiado y le ha reconocido el total de las deudas directas con el organismo, mientras que plantea una quita importante para los tenedores individuales de bonos. La condición principal que manifiesta para acordar los pagos, es que ningún plan comprometa el proceso de reactivación de la economía, para lo cual el estado no puede usar todo su excedente para la deuda, porque esto significaría "pagar con el hambre del pueblo". Esto de por sí ha introducido un elemento en el debate, ausente en los últimos treinta años, al que el FMI y los acreedores no pueden contestar con argumentos de peso; a la vez que le abre al conjunto de la sociedad una perspectiva diferente, en la que hay una relación proporcional entre los montos de los pagos y el futuro del país. Como es sabido el FMI, el gobierno de EEUU, y el G7, como voceros de los monopolios financieros y las transnacionales, exigen no sólo el pago de la deuda, sino también "negociaciones de buena fe" con los bonistas, mayor excedente fiscal(o sea nuevos recortes al presupuesto), aumentos de tarifas de las privatizadas, privatización de los bancos Nación, Ciudad y Provincia de Bs As, mas recortes a los presupuestos provinciales a través de una nueva ley de coparticipación, reforma tributaria que profundice la regresividad del sistema fiscal, mayor apertura de la economía a través de la adscripción a tratados de libre comercio como el ALCA o la actual propuesta de mercado libre entre el Mercosur y la Unión Europea, etc. Mantenerse dentro de las "reglas de juego" y negociar desde allí, lo lleva al gobierno a ir dando pasos tácticos que tienen como objetivo principal mantener el alto consenso político interno, preservando un piso aceptable de crecimiento de la economía. Crecimiento, que como es notable está asentado en el aumento del consumo de la población, y por ende en el desarrollo del mercado interno. Esto implica actitudes contradictorias como reconocer al FMI como acreedor privilegiado y pagarle la deuda sin quita, mientras que los bonos adquiridos por la AFJP, sufrirán reducciones que afectarán a los jubilados. Por otro lado el gobierno acepta la continuidad de la oficina del FMI instalada en el edificio del Banco Central que monitorea cotidianamente la marcha de nuestra economía, pero no acepta el aumento de tarifas; impide la privatización de la banca pública; resiste las presiones para destinar mayores proporciones del superávit para pagar la deuda; mantiene retenciones a la exportación contra las que los exportadores despotrican a diario, y con lo obtenido aumenta parte de los sueldos y jubilaciones de los empleados públicos; sostiene el dólar en tres pesos para proteger el mercado interno; mantiene a rajatabla el compromiso con Brasil de trabar el ALCA, etc., todas medidas que le permiten sostener consenso. En este contexto es que se inscribe la nueva propuesta del gobierno a los bonistas, propuesta que tiene como objetivo principal, evitar asumir el pago inmediato de nuevos compromisos. Es absolutamente claro para todos los actores involucrados, que más allá de las declaraciones reafirmadas una y otra vez por el ministro Lavagna de

que “queremos hacer una propuesta sustentable en el tiempo”, que es imposible de “sustentar” un plan que implique mantener un 3.3% del PBI destinado al pago de la deuda hasta el año 2010, y desde allí bajar al 2%. Hay variables inmanejables como las tasas de interés, el precio de los commodities, o la evolución de la propia crisis económica internacional, que tornan en virtual un acuerdo de estas características, como una y otra vez lo ha demostrado el desarrollo de los acontecimientos en el último siglo. Entonces el objetivo de los acreedores es cobrar ahora lo mas que puedan y elevar el precio de los bonos en el mercado para seguir con la timba especulativa. El FMI se aseguró para lo inmediato el pago de sus cuotas, los bonistas vienen a pedir un pago contado ya, porque puede no haber después. El gobierno propone un período de gracia que en los hechos significa empezar a pagarles después.

La táctica de frenar los embates de los organismos multilaterales de crédito y de las transnacionales, resistiendo aquí y concediendo allá, y privilegiando sostener el consenso político es un camino peligroso, que sólo puede llevar a buen puerto, si por un lado el consenso político se va transformando en organización y mayor fuerza política de la que hoy obviamente adolecemos, y por otro, si no se cede a presiones para tomar medidas que profundicen la concentración de la riqueza y la regresividad de la distribución. Esto significa prepararnos para estar en mejores condiciones en las futuras batallas, para lo cual es indispensable promover el protagonismo popular alrededor de esta problemática fundamental. Hay que tomar el guante lanzado por el presidente cuando dice que el problema de la deuda es un problema de todos los argentinos. Hay que salir a debatir con la gente explicando el verdadero carácter fraudulento de la deuda, y porqué lo que corresponde no es pagar poco, o pagar después, sino que **LO JUSTO ES NO PAGAR LO QUE ES ILEGÍTIMO**. Debemos llegar a estar en condiciones de rescindir los acuerdos con el FMI, denunciando ante la comunidad internacional su complicidad con los crímenes aberrantes de la dictadura, y con los grandes empresarios nativos y extranjeros que pergueñaron el fraude de la deuda externa entre los años 1976 y 1983. Debemos estar en condiciones de recuperar en plenitud nuestra soberanía económica, hoy todavía amenazada por los funcionarios del FMI que desde oficinas que mantienen en el BCRA, día a día intentan dirigir la marcha de nuestra política económica. Las medidas que ha tomado el gobierno en el terreno de la negociación de la deuda externa son obviamente insuficientes, pero como en otros terrenos, ha abierto un camino que desde el movimiento popular debemos recorrer y profundizar.